

CONTROL Y DEPURACIÓN DEL PROFESORADO DESDE EL SISTEMA EDUCATIVO.

Francisco MARTÍN ZÚÑIGA
Carmen SANCHIDRIÁN BLANCO
Universidad de Málaga

Quienes firmamos este trabajo somos investigadores de proyectos I + D¹ centrados en el estudio de la depuración franquista del profesorado (instituto de secundaria y escuela normal). Hemos profundizado en los agentes de la represión, los informantes, la ideología y fines que subyacen en la política represiva y la mecánica seguida en la toma de decisiones sancionadoras o exculpatorias. Asimismo, se han analizado globalmente los expedientes de depuración con los cargos formulados, los pliegos de descargo adjuntos, las acusaciones e informes, etc. para así poder entender mejor el proceso depurador. Finalmente, aportamos también algunos datos cuantitativos sobre el profesorado sancionado y su distribución en función de diversas variables.

Pero en nuestro país, la acción represora sobre los docentes no es algo exclusivo de la dictadura franquista, sino que, por desgracia, es una cuestión endémica. Baste como ejemplo el estudio que ahora iniciamos sobre las políticas depuradoras o “purificadoras” desarrolladas a lo largo del siglo XIX, donde la injerencia del estado en la docencia, especialmente la universitaria, se convierte en algo habitual con la finalidad de imponer la religión católica al profesorado e impedir que enseñe cualquier doctrina o planteamiento científico contrario, según el poder estatal y eclesiástico, a los preceptos de dicha religión. Pero a los gobiernos absolutistas no sólo se interesa por controlar el credo político o religioso del profesorado, sino que, en un momento dado, lo que pretenden es eliminar, tras el correspondiente proceso de “purificación”, a todo aquél que no piense como ellos: ejemplo de esto son las denominadas “cuestiones universitarias”².

En definitiva, esto es una muestra mas de cómo los regímenes totalitarios ejercen siempre un estricto control sobre los docentes tratando de consolidar sus estructuras y

¹ En estos momentos, somos miembros del proyecto “La depuración franquista del profesorado de Escuelas Normales” (EDU2010-19255), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), actualmente Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), siendo la investigadora principal la doctora Sanchidrián.

² Cfr. SOUTO GALVÁN, B: *La libertad de cátedra y los procesos de depuración del profesorado: desde principios del siglo XIX hasta la Constitución de 1978*, Madrid, Marcial Pons, 2005

conservar el orden impuesto, es decir, de atender a su propia conservación obligando a reproducir su propia ideología e intentando evitar que se difunda cualquier idea que pueda deslegitimizarlos.

Nuestra intención es, por tanto, la de analizar las peculiaridades de esa acción represiva, desde las Cortes de Cádiz al final de la Restauración monárquica, sin perder de vista que ahí tenemos los fundamentos de lo que después va a ser la depuración más contundente de todo el profesorado de nuestra historia reciente: la franquista.

Partimos de una breve reflexión sobre eso que hemos denominado la “ocasión perdida” de la constitución gaditana de establecer un estado aconfesional o laico con pleno reconocimiento de la libertad de cátedra; continuamos comentando las medidas propuestas por Fernando VII para extirpar (“purificar”) cualquier huella de los liberales reunidos en las cortes de Cádiz; seguidamente, partimos del momento en el que se produce la vinculación definitiva entre iglesia-estado en este siglo (Concordato de 16 de marzo de 1851) y profundizamos en la incidencia que ello tiene en las políticas educativas posteriores; finalmente, terminamos el estudio destacando la especial incidencia de la acción represiva en el profesorado universitario en el último tercio del siglo XIX.

La “ocasión perdida” en la Constitución de 1812

Como nos recuerda el profesor Manuel Puelles Benítez, en el título IX (“*De la instrucción pública*”) los diputados se muestran como herederos de los preceptos ilustrados:

“En efecto, la fe en la educación básica común a todos los hombres, la conveniencia de la gratitud total de la instrucción pública, son ideas que hombres como Jovellanos, Cabarrús o Campomanes habían defendido con extraordinaria tenacidad por todo el territorio nacional”³.

Incluso, dentro del título mencionado se especifica que todos los españoles “tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que establezcan las leyes” (art. 371). Es decir, se establece lo que hoy llamamos la “libertad de expresión”, aunque ello no implica el reconocimiento de la facultad de los docentes para enseñar y debatir sin verse limitado por doctrinas institucionalizadas, es decir, no se admite la “libertad de cátedra”, puesto que, pese a algunas voces discordantes, el art. 12 de la constitución especifica que “la religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra”.

Se pierde, por tanto, una gran oportunidad de “secularizar el estado” y, posiblemente, de haber reducido ese afán persecutorio hacia los docentes que tantos males ha causado a este país. No es de extrañar que Agustín de Argüelles (“el Divino”), diputado que leyó ante las Cortes el “Discurso preliminar” del proyecto de constitución, reconociera años mas tarde que la decisión de consagrar en dicha constitución la confesionalidad del estado fue

Un error grave, funesto, origen de grandes males, aunque inevitable [...]. Se creyó prudente dejar al tiempo, al progreso de las luces, a la ilustrada controversia

³ HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA: *II De las Cortes de Cádiz a la Revolución de 1868*. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia. 1985, T. 13, p. 13 (Introducción de Manuel Puelles Benítez).

de los escritores, a las reformas sucesivas y graduales de las cortes venideras, que se corrigiese, sin lucha ni escándalo, el espíritu intolerante que predominaba en gran parte del estado eclesiástico⁴.

Las “purificaciones” en el reinado de Fernando VII.

Efectivamente, ese “espíritu intolerante” al que alude Argüelles llega a su máxima expresión en el reinado de Fernando VII. Al poco de ser restablecido en el trono como monarca absoluto firma un real decreto donde

declara aquella constitución y tales decretos nulos y de ningún valor y efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubieran pasado jamás tales actos, y se quitasen de en medio del tiempo alguno, y sin obligación en mis pueblos y súbditos, de cualquiera clase y condición, a cumplirlos ni guardarlos (Valencia a 4 de mayo de 1814).

Como muestra de ese espíritu reaccionario es el restablecimiento de la Inquisición (decreto de 21 de julio de 1815) y la supresión de la libertad de prensa. La educación vuelve a manos de la iglesia, pues tal como manifiesta el duque de Híjar, “sólo poniendo á la juventud bajo la enseñanza de la Iglesia podría verse en breve la nación libre de los males que lloramos”⁵.

No obstante, lo verdaderamente nefasto fue la acción represiva sufrida por el profesorado en la denominada “década ominosa (1823-1833)”⁶ cuyas consecuencias aún son objeto de discusión. No existe todavía ningún balance de las ejecuciones sumarias o bajo la forma de ajuste de cuentas realizadas en 1823 por el Estado. Lo más destacado es la voluntad del rey y de los medios contrarrevolucionarios de crear instituciones encargadas de erradicar el liberalismo del conjunto de la sociedad.

Se puede hablar de obsesión depuradora, pues con esa finalidad desde el Consejo de Castilla se promulga el decreto de 27 de junio de 1823 donde se crean Juntas provinciales de purificación de todos los empleados públicos y en Madrid se constituye una denominada “Suprema” que se encarga de la alta función pública y centraliza las informaciones que emanan de las provinciales. Toda esta estructura represiva tiene la finalidad de desposeer de su función a cualquier persona cuya adhesión al liberalismo se certificara mediante la delación de tres testimonios como mínimo⁷.

⁴ DE ARGÜELLES, AGUSTÍN: *Examen histórico de la reforma constitucional que hicieron las Cortes generales y extraordinarias desde que se instalaron en la Isla de León el día 24 de setiembre de 1810, hasta que cerraron en Cádiz sus sesiones en 14 del propio mes de 1813*. Londres, Imp. de Carlos Wood e Hijo, t. II, 1835. pp. 99, cfr. SOUTO GALVÁN, B: *op. cit.*, p. 17.

⁵ Cfr. RUIZ BERRIO, J. *Política escolar en España en el S. XIX*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1970, p 44 e HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA: *De las Cortes...*: *op. cit.*: p. 16.

⁶ Cfr. LUIS, J. Ph: “La década ominosa (1823-1833), una etapa desconocida en la construcción de la España contemporánea”. *Ayer*, 41, 2001, pp. 85-117.

⁷ Para mayor información sobre esta estructura represora cfr. BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, B.: “La purificación de los maestros de primeras letras y preceptores de gramática en la reforma de Fernando VII”, *Historia de la Educación. Revista interuniversitaria*, 2, 1983, pp. 249-254.; GUTIERREZ BARBA, A.: “El Trienio Liberal y la represión absolutista de los maestros de primeras letras durante la Década Ominosa: el caso palentino”, *Cabás*, 7, 2012, pp. 1-15; MERINERO MARTÍN, M. J. *Purificaciones de empleados públicos: Extremadura 1824*. Universidad de Extremadura, Cáceres, 1989 y LUIS, J. Ph.: “Une utopie réactionnaire: l'dépuration de l'administration durant la dernière décennie du règne de Ferdinand VII (1823-1832)”. *Mélanges de la Casa de Velázquez*. Madrid, tomo XXX (3), 1994, pp. 7-

Para el ámbito universitario se aprueba una medida específica en la real cédula de 21 de julio de 1824. En ella se ordena el sometimiento de toda la comunidad universitaria al juicio de una junta específica de purificación constituida por el regente, un máximo representante de la jerarquía eclesiástica, un ministro, uno de los rectores y un representante del cuerpo de doctores (art. 2). Establece la mencionada cédula las sanciones correspondientes: *expulsión definitiva* de las cátedras a los que hubiesen pertenecido a la “milicia nacional voluntaria” u ocupado escaños como diputado a cortes durante el “trienio liberal” (cfr. art. 4). También se establece la *expulsión* de la universidad de los alumnos que formaron parte de las mencionadas milicias (art. 9).

No se tiene un conocimiento muy preciso de las resoluciones de esas juntas, pues el propio Fernando VII ordenó la quema de los expedientes, no obstante, según aparece en el libro de registros de purificaciones del Archivo Histórico Nacional, existe un buen número de catedráticos y alumnos declarados reprobados o impurificados”⁸

Finalmente, parecen insuficientes las medidas represoras anteriores y, al final, se promueve una reforma integral de toda la universidad a través del *Plan literario de estudios y arreglo general de las Universidades del reino* aprobado por la real orden de 14 de octubre de 1824⁹ y firmada por Francisco Tadeo de Calomarde. El objetivo de dicho plan es el de eliminar de las aulas universitarias el más mínimo atisbo de influencia de las ideas liberales basado en:

1º *Uniformismo* de las enseñanzas: “El plan literario de estudios, y el arreglo general del gobierno interior y económico y de disciplina serán uniformes en todas las universidades de la península e islas adyacentes” (art. 1º).

2º *Centralismo* en cuanto a la concentración del poder en una sola persona, el rector: “Que las elecciones de rectores recaiga en hombres de edad provecta y profesor acreditado por su talento, prudencia y doctrina” (art. 231).

3º *Control ideológico* ejercido por dicho rector “que oirá o hará que comisionados de su confianza oigan las explicaciones de los maestros, calando sobre la pureza de las doctrinas religiosas y monárquicas” (art. 240). Incluso se prevé la creación de un *tribunal de censura*, en el que al menos dos de sus miembros han de ser clérigos, encargado de inspeccionar a profesores y alumnos en materia religiosa (cfr. arts. 266 y 267).

En definitiva, este texto legislativo incorpora por primera vez en este siglo la unión de la política y la religión en materia educativa. No se trata, puntualiza el profesor Puelles Benítez:

... como en las Cortes de Cádiz, de aceptar la religión Católica como la religión del pueblo español..., sino de fundir ambos términos en uno sólo, es decir, para el absolutismo español y, posteriormente, para el sector más reaccionario del conservadurismo político, la ortodoxia política presupone la religión y viceversa¹⁰.

35; VENTAJAS DOTE, F. y POZO FERNÁNDEZ, M^a. C.: “Fuentes documentales para el estudio de las purificaciones de maestros de primeras letras en el reinado de Granada durante la década absolutista (1823-1833).

⁸ Se sancionan a más de quince profesores, siendo especialmente sangrante el caso de la escuela de veterinaria con la “impurificación” de cinco catedráticos y veinticinco alumnos cfr. SOUTO GALVÁN, B: *op. cit.*, pp. 31 y 32

⁹ Una copia de esta orden la encontramos en HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA: *De las Cortes...*: *op. cit.*: pp. 68 y ss.

¹⁰ *Ibid.*, p. 22

Pero la represión no alcanza exclusivamente al profesorado y alumnado universitario, sino que se extiende a todo los docentes. Especialmente dramático es el caso del maestro valenciano (Ruzafa) Cayetano Ripoll, última víctima mortal de la inquisición en nuestro país, que en 1824 es juzgado y, tras una espera de dos años, ahorcado a orillas del Turia el 31 de julio de 1826 sobre un barril con llamas pintadas donde, posteriormente, sus restos son introducidos y quemados¹¹. Se le acusa de que:

No creía en Jesucristo, en el misterio de la Santísima Trinidad, en la Encarnación del Hijo de Dios, en el de la Sagrada Eucaristía, ni en la Virginidad de María Santísima, ni en los Santos Evangelios, ni en la Infalibilidad de la Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana; no cumplía con el Precepto Pascual; impedía que los niños dijese Ave María Purísima y que hiciesen la señal de la cruz; que no era necesario oír misa para salvarse, y retraía a los mismos dar la debida adoración al Señor Sacramentado cuando era llevado para administrar el Viático a los enfermos¹².

Esta monstruosidad muestra, en línea con lo que comentamos al principio, hasta donde son capaces de llegar los gobiernos totalitarios para mantenerse en el poder, siendo una de sus presas favoritas los docentes, pues saben que son la herramienta fundamental para inculcar en el pueblo su ideología dominante. Afortunadamente, la Inquisición es abolida al poco tiempo (decreto de 15 de julio de 1834) durante la regencia de María Cristina. Pero ello no significa que desaparezca la acción de control religioso-político y represión del profesorado, tal como veremos a continuación.

El Concordato de 16 de marzo de 1851 y su repercusión la ley Moyano

Durante el reinado de Isabel II se mantiene la unión política entre iglesia católica y estado. Fruto de ese vínculo es el Concordato con la Santa Sede de 16 de marzo de 1851, donde se expone que:

La instrucción en las Universidades, Colegios, Seminarios y Escuelas públicas o privadas (...), será en todo conforme a la doctrina de la misma religión católica (...); y a este fin no se pondrá impedimento alguno a los obispos y demás prelados diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina de la fe (art. 1 y 2)¹³.

Este mandato tiene un reflejo inmediato en la ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, pues en su art. 295 (Título IV: “De la Inspección”) se recoge de modo prácticamente literal lo expresado en los artículos anteriores:

Las autoridades civiles y académicas cuidarán, bajo su más estrecha responsabilidad, de que ni en los establecimientos públicos de enseñanza ni en los privados se ponga impedimento alguno a los RR. Obispos y demás prelados

¹¹ Una descripción novelada de estos hechos no la encontramos en la novela *Inquisitio* (2006) de Alfred Bosch Pascual.

¹² Fragmento de la carta del vicepresidente de la Junta de Fe de Valencia dando cuenta del proceso

¹³ Un extracto de este concordato se puede consultar en HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA: *De las Cortes...: op. cit.*: pp. 240 y 241.

diocesanos, encargados por su ministerio de velar por la pureza de la doctrina, de la Fe y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud.

Es decir, se le otorga a la Iglesia el rango de inspectora, junto al resto de cuerpos de inspectores, para evitar “que en los libros de texto ó en las explicaciones de los profesores se emitan doctrinas perjudiciales á la buena educación religiosa de la juventud, dará cuenta al gobierno, quien instruirá el oportuno expediente...” (art. 296).

Este control se extiende también a los libros de texto, y en especial a los de enseñanza primaria:

Pues las obras que traten de Religión y Moral no podrán señalarse de texto sin previa declaración de la Autoridad eclesiástica...” (art. 92) y “...los libros que el Gobierno se propusiere señalar para el ejercicio de lectura en la primera enseñanza, se dará conocimiento a la Autoridad eclesiástica (art. 93).

Por supuesto que para ejercer en la enseñanza pública al profesorado se le exige un justificante de “buena conducta religiosa y moral” (art. 167), y en caso de infundir en sus discípulos “doctrinas perniciosas“, no acordes con los preceptos ideológicos del estado-católico, el artículo 170 prevé sanciones como la inhabilitación para ejercer la docencia o la formación de expediente, aunque quien impone la condena es el poder judicial no del eclesiástico.

En definitiva, la moderada ley Moyano concede a la iglesia plenos poderes en el control del sistema educativo y continúa facilitando instrumentos para depurar y sancionar a aquellos docentes que no se ajustan al perfil ideológico impuesto por el estado confesional. No reconoce ni protege la libertad de cátedra y la académica, puesto que es el Estado quien indica los libros que se han de usar en los distintos grados.

Desgraciadamente esos son los parámetros que van a dominar, salvo en los paréntesis republicanos, en las políticas educativas de nuestro país durante casi cien años, periodo de vigencia de dicha ley: de hecho, cuando se inicia la depuración franquista, el profesorado que no se presenta a la “requisitoria” por encontrarse fuera de su destino, debido a que el golpe de estado le ha pillado fuera de su residencia habitual o, simplemente, ha preferido el exilio, se le separa definitivamente de su puesto en aplicación del artículo 171¹⁴ de dicha ley:

Los profesores que no se presenten á servir sus cargos en el término que prescriban los reglamentos, ó permanezcan ausentes del punto de su residencia sin la debida autorización, se entenderán que renuncian sus destinos.

Las “Cuestiones” universitarias.

Ya hemos visto como la acción represiva de los gobiernos integristas católicos se ceba especialmente con el profesorado universitario por su incidencia directa en la formación de las élites del país. Dicha acción tiene especial repercusión en la segunda mitad del S. XIX, en lo que se ha dado en denominar las “cuestiones universitarias”.

¹⁴ Cfr. SANCHIDRIAN BLANCO, C., GRANA GIL, I. y MARTIN ZÚÑIGA, F.: “Análisis y valoración de los expedientes de depuración del profesorado de Instituto de Segunda Enseñanza en el franquismo (1936-1942). Resultados generales”, *Revista de Educación*, 356, 2011; pp. 377-399.

En la primera, el detonante es el resurgimiento en las aulas universitarias del debate sobre la “libertad de ciencia”, la primacía de la ética, la consideración de la tolerancia como una virtud básica y una fe ilimitada en la educación. Ese debate se debe, en parte, a la publicación en 1860 del *“Ideal de la Humanidad para la vida”*, obra en la que Sanz del Río hace su interpretación del pensamiento de Krause.

No se hacen de esperar las quejas del fundamentalismo católico, como es el caso del obispo de Tarazona quien manifiesta en un artículo que hay que impedir que “la impía doctrina aumente sus prosélitos y difunda el veneno por todas partes”¹⁵. Dichas manifestaciones obtiene repuesta del poder político en la R. O. de 27 de octubre de 1864: se recuerda al profesorado que esta sujeto al juramento de respeto a la fe, fidelidad a la reina y obediencia a la constitución previsto en el art. 170 de la Ley Moyano y en el Reglamento General para la Administración y Régimen de la Instrucción Pública de 20 de junio de 1859.

En este Reglamento se establece ya un instrumento bastante preciso para sancionar al profesorado: se le otorga al rector la potestad de proponer la suspensión de empleo; una vez instruido el expediente y comunicado el pliego de cargo al profesor correspondiente, éste puede presentar descargos en el plazo de cinco días y es el Consejo de Universidades quien dicta la resolución, pudiendo imponer las penas de apercibimiento, privación de sueldo por un mes o suspensión de empleo por tres meses (cfr. arts. 38 y ss.). Si se considera que la pena debe ser mayor, el Consejo se lo ha de comunicar al gobierno, único competente para imponer penas superiores¹⁶.

Aplicando este procedimiento se le abre, en un primer momento, expediente a Castelar, pero es a partir de la puesta en marcha por el gobierno moderado de una campaña de adhesión a la Monarquía cuando se produce el conflicto: cincuenta catedráticos de la universidad de Madrid se niegan a firmar dicha adhesión, lo que comporta la separación de sus cátedras, entre otros, de Salmerón, Sanz de Río, Fernando de Castro y a Francisco Giner de los Ríos se le sanciona con suspensión provisional por protestar en defensa de sus compañeros. Afortunadamente, pocos meses después estalla la revolución del 68 decretando la libertad de cátedra y restituyendo a los profesores en sus cátedras.

Tras la Restauración del antiguo régimen (1874) se instaura de nuevo el integrista católico, defendido a ultranza por el marques de Orovio, ministro de Fomento, que el 26 de febrero de 1875 publica una circular reiterando la confesionalidad del estado y la supresión de la libertad de expresión¹⁷. La reacción en contra de un grupo de profesores no se hizo esperar, comenzando lo que se ha dado en denominar la segunda “cuestión universitaria”. Resultado de esta lucha es la separación de sus cátedras de Salmerón, Giner de los Ríos, Azcárate y, por solidaridad presentan su dimisión personalidades como Castelar, Montero Ríos, Figuerola, Moret...

A modo de epílogo

En definitiva, podemos concluir que a lo largo del S. XIX se ejerce una purga de carácter político e ideológico del profesorado, con especial incidencia en el universitario. En la primera mitad del siglo la acción represiva tiene un carácter más

¹⁵ Cfr. HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA: *De las Cortes...: op. cit.*: p. 40

¹⁶ Cfr. SOUTO GALVÁN, B: *op. cit.*, pp. 48 y 49.

¹⁷ Una copia de esta circular la encontramos en HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA: *III De la Restauración a la II República*. Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, T. 14, pp. 53-57 (Introducción de Manuel Puelles Benítez).

violento, especialmente en la denominada “década ominosa” (1823-1833), llegando incluso a la ejecución de algún docente, como el caso del maestro valenciano Cayetano Ripoll, mientras que a partir de la Ley Moyano, y en concreto el Reglamento de 1859, se articula un instrumento depurador, en apariencia un simple instrumento de carácter administrativo-legal, que comienza a recordarnos el modelo impulsado por Franco de Comisiones de depuración, Pliegos de cargo y de descargo, resoluciones...¹⁸, aunque éste era absolutamente contrario a una actuación “*al estilo liberal, con sus monstruosas y suicidas amnistías que encierran más de estafa que gesto de perdón*”¹⁹.

Por otro lado, las purgas, sean del signo que sean, necesitan de la colaboración activa de parte de la sociedad, que bien por convencimiento, por buscar un beneficio a cambio de su apoyo, o ambas cosas a la vez, ayuda a consolidar el régimen político. Se favorecen, en consecuencia, las delaciones y las denuncias particulares anónimas, tal como se aprecia en el modelo inquisitorial de Fernando VII, dejando vía libre a la mera venganza personal. El proceso se halla viciado de origen y todo va en contra del encausado, que es quien tiene que demostrar su inocencia con avales. Posiblemente, tras cada sanción se halla un perjudicado pero también un beneficiario. No obstante, en el periodo investigado no se aprecia tanto el deseo, como ocurre en la depuración franquista, de convertir Cátedras y auxiliares se convirtieron en botín y retribución por los servicios prestados

La represión, el exilio, la sumisión de la ciencia a la política y la religión agravan la precariedad de la enseñanza pública y en especial la universitaria. Se defiende una universidad donde el purismo ideológico-religioso es más importante que el mérito académico y docente. Al calor de ese convencimiento se desarrolla toda una línea de pensamiento extremadamente radical que estigmatizaba la “intelectualidad” y se la convierte incluso en un cargo punible.

¹⁸ Cfr. MARTÍN ZÚÑIGA, F; GRANA GIL, I y SANCHIDRIÁN BLANCO, C: “La depuración franquista de los docentes: control y sometimiento ideológico del profesorado de instituto”. *Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria*, 29, 2010, pp. 244-45

¹⁹ Cfr. CLARET MIRANDA, J. “Cuando las cátedras eran trincheras. La depuración política e ideológica de la Universidad española durante el primer franquismo” *HISPANIA NOVA. Revista de Historia Contemporánea*, 6 (2006).